

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 13 del Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifican disposiciones del proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, el cual quedará así:

**Artículo 13.** Modifíquese el artículo 548 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

**Artículo 548. Comunicación de la aceptación.** A más tardar al día siguiente a aquel en que reciba la información actualizada de las acreencias por parte del deudor, el conciliador comunicará a todos los acreedores relacionados por el deudor la aceptación de la solicitud, adjuntando copia de la misma y de sus anexos, e indicándoles la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas. La comunicación se remitirá por escrito a través de las mismas empresas autorizadas por este código para enviar notificaciones personales o por medio digital en los términos del artículo 291. En caso de que la audiencia se adelante de forma no presencial, mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la información, se comunicará la plataforma por la cual se llevará a cabo, debiéndose garantizar a todos los intervinientes el acceso a la misma para respetar el principio constitucional del debido proceso.

En la misma oportunidad, el conciliador oficiará a los jueces de conocimiento de los procesos judiciales indicados en la solicitud, comunicando el inicio del procedimiento de negociación de deudas. En el auto que reconozca la suspensión, el juez realizará el control de legalidad y dejará sin efecto cualquier actuación que se haya adelantado con posterioridad a la aceptación. La suspensión del proceso no implicará la de los deberes de los auxiliares de la justicia frente a los bienes que administren, ni las del juez frente a dichos auxiliares.



César Augusto Lorduy Maldonado  
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

Los centros de conciliación ~~y los conciliadores no vinculados a éstos~~, dispondrán de una plataforma electrónica para la realización de las audiencias y de una dirección electrónica para el envío de las comunicaciones y notificaciones a las partes, así como para el recibo de la documentación y observaciones correspondientes al proceso.

Parágrafo primero. En lo no dispuesto con relación al uso de tecnologías de la comunicación y la información, se regirá por lo establecido en el Decreto Ley 491 de 2020 aun cuando hubiera cesado la emergencia económica, pero continúen los riesgos derivados del COVID 19.

Parágrafo segundo. Cuando el deudor manifieste que ignora el lugar donde puede ser citado un acreedor, debe practicarse el emplazamiento previsto en el artículo 108, y la designación de curador ad litem, si a ello hubiere lugar.

Cordialmente,

**CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Atlántico

**ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Antioquia

**AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA**

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456  
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym

## **JUSTIFICACIÓN**

El Proyecto de Ley 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, que posterior a su radicación fue acumulado al Proyecto de Ley 64 de 2020 junto con el 114 de 2020 Cámara, introdujo la modificación en su artículo 3° al artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, estableciendo la posibilidad de que el deudor acuda a un abogado certificado como conciliador para que conozca directamente de los procedimientos de negociación de deudas.

En la Exposición de Motivos original se indicó que esta iniciativa tiene como finalidad principal entregar a las personas naturales no comerciantes, una mejoría en el proceso de insolvencia, disminuyendo su término de duración e incluyendo herramientas que permitan un trámite ágil e idóneo, tal y como lo prevé el Decreto Legislativo 560 de 2020 para las personas jurídicas.

En consecuencia, la motivación de las modificaciones introducidas son las de hacer más efectivo el proceso de insolvencia “disminuyendo” sus términos, y no tiene relación, para la eficiencia del trámite, permitir que se acuda a un abogado (que el deudor elija), para que conozca del procedimiento. Este mecanismo, además de los inconvenientes que tiene y que aquí se mencionan, no brinda celeridad al procedimiento. En efecto, hace necesario que, además de realizar el acuerdo de pago, posteriormente se avale por el Ministerio Público, por lo que realmente resultará más demorado, mucho más cuando no se establece un término para que otorgue el aval, ni el trámite a seguir en caso de negarse, teniendo en cuenta además la cantidad de funciones y actuaciones en las que estos funcionarios participan. Todo esto en detrimento de los intereses patrimoniales del deudor, quien verá encarecida su deuda por el paso del tiempo.

Adicionalmente, este mecanismo podría vulnerar el principio de transparencia y buena fe que debe guiar el trámite. En efecto, aún bajo el amparo de la normatividad actual, en donde se establece cierto control sobre la persona que actúa como conciliadora, se han presentado situaciones indeseadas, por lo que no resulta conveniente la propuesta normativa sugerida.



**César Augusto Lorduy Maldonado**  
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

Es de aclarar otorgar la atribución al Ministerio Público de avalar el acuerdo de pago producto de la negociación de deudas, implica otorgarle funciones que no le están asignadas constitucionalmente, puesto que el límite de estas se encuentra claramente determinado por el artículo 117 de la Carta.

No resulta claro tampoco cómo se realizará el análisis de los impedimentos o las recusaciones, que probablemente se presentarán, y tampoco está definido el costo que tendrá el citado funcionario, asuntos que no se desarrollan en el texto normativo y tampoco se someten a la reglamentación de gobierno.

Al introducir esta competencia, se pierde el principio de independencia de quien guía el trámite, por cuanto el deudor es el que va a contratar al abogado conciliador, razón por la cual no existiría un tercero neutral.

Finalmente, si lo que se pretende es llegar a algunas zonas en donde no se encuentren centros de conciliación habilitados por el Ministerio de Justicia y el Derecho, se sugiere establecer la posibilidad de que el Gobierno Nacional, se apoye en las Alcaldías Municipales o Cámaras de Comercio para que dentro de su planta de personal estas entidades cuenten con el servicio de un abogado conciliador debidamente certificado y capacitado en insolvencia, para que sea esta persona quien se encargue de impulsar el trámite de negociación de deudas, garantizando así el acceso a la justicia, el principio de imparcialidad y el debido proceso.

**AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA**

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456  
Email: [clorduym@gmail.com](mailto:clorduym@gmail.com) - [cesar.lorduy@camara.gov.co](mailto:cesar.lorduy@camara.gov.co)



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym